

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 104/2021

**ACTOR: MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN,
ESTADO DE MÉXICO**

**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, instructor en el presente asunto, con lo siguiente:

Constancia	Registro
Escrito de Ángel Zuppa Núñez y Ana Laura González González, quienes comparecen en su carácter de Presidente y Síndica del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México.	015044

La documental de cuenta fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Conste.

Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

Agréguese al expediente, para que surta efectos legales, el escrito del Presidente y Síndica del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, cuya personalidad está reconocida en autos, a quienes se tiene desahogando la prevención formulada mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, al manifestar que en el actual momento procesal, no señalan como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de México y expresar, bajo protesta de decir verdad, que desconocen si a la fecha ya fue publicado el *“DICTAMEN APROBADO POR LA RESPONSABLE COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DEL DIFERENDO LÍMITROFE INTERMUNICIPAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTITLÁN Y CUAUTITLÁN IZCALLI, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO”*.

En ese tenor, visto el escrito de demanda y de desahogo de prevención, mediante los cuales se promueve controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado de México, y de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios del citado poder, en la que impugnan lo siguiente:

“DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA:

- 1) LA OMISIÓN DE CITACIÓN A GARANTÍA DE AUDIENCIA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE DIFERENDO LÍMITROFE ENTRE LOS***

MUNICIPIOS DE CUAUTITLÁN Y CUAUTITLÁN IZCALLI, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

- 2) EL DICTAMEN APROBADO POR LA RESPONSABLE **COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO** EN EL QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DEL DIFERENDO LÍMITROFE INTERMUNICIPAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTITLÁN Y CUAUTITLÁN IZCALLI, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA REMISIÓN AL PLENO DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN.
- 3) LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL DICTAMEN APROBADO POR (SIC) **COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO** PARA DAR POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DEL DIFERENDO LÍMITROFE INTERMUNICIPAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTITLÁN Y CUAUTITLÁN IZCALLI, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO.”

Al respecto, de la revisión integral de la demanda y sus anexos, así como del escrito de desahogo de prevención, se arriba a la conclusión que **procede desechar la controversia constitucional promovida**, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25¹ de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para desechar de plano un medio de control constitucional como el que ahora se analiza, si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita enseguida:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por “manifiesto” debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo “indudable” resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.”²

Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

¹**Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

Artículo 25. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

²**Tesis P./J. 128/2001.** Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188643.

sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

En la especie, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que **se actualiza la causa de improcedencia** prevista en el artículo 19, fracción VI³, de la referida ley reglamentaria, en virtud de que el acto impugnado se emitió dentro de un procedimiento que no ha concluido.

Esto es así, porque de la lectura integral del escrito inicial de demanda y sus anexos, se desprende que lo pretendido por el Municipio actor es impugnar el Dictamen por el que se da por concluido el procedimiento para la solución del diferendo limítrofe intermunicipal entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México, aprobado en principio por la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios de la legislatura del Estado de México, y luego por el Congreso estatal.

Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que del principio de definitividad que rige para la impugnación de actos en controversias constitucionales, se pueden desprender los siguientes supuestos:

1. Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado y a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la solución del propio conflicto.
2. Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,

³**Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...).

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...).

3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento, que no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva que pueda ser impugnada en controversia constitucional, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional.

En ese sentido, la materia de impugnación en el presente medio de control constitucional versa sobre actos del procedimiento para resolver las diferencias de límites territoriales respecto de los municipios de la entidad. Dicho procedimiento se encuentra sujeto a diversas etapas que lo componen, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluya, lo cual acontecerá con la publicación del Decreto correspondiente, ya que es hasta ese momento cuando los actos que lo integran adquieren definitividad.

En efecto, la impugnación del Dictamen por el que se da por concluido el procedimiento para la solución del diferendo limítrofe intermunicipal entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México, puede realizarse a partir de que concluya el procedimiento respectivo, constituyendo su culminación cuando se lleve a cabo la publicación atinente en el Periódico Oficial de la entidad; esto, ya que la publicación permite la difusión y conocimiento del acto.

Lo anterior, en la inteligencia de que el Dictamen impugnado, está sujeto a los principios generales que rigen el procedimiento legislativo, ello sin que sea óbice que el mismo no descansa estrictamente en una ley, sino en un acto que forma parte del procedimiento para la emisión y publicación en su momento del Decreto legislativo, en el que se tenga por concluido el procedimiento para la solución del diferendo limítrofe entre los mencionados municipios; lo cual tiene sustento en el artículo 77, fracción III, de la Constitución del Estado de México, que dispone lo siguiente:

“Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o del Gobernador del Estado: [...]

III. Promulgar y publicar las leyes, decreto o acuerdos que expida la Legislatura del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; [...]

En relación con lo anterior, resulta relevante tener presente que, como se precisó en párrafos precedentes, la parte actora impugna actos que se emitieron en una etapa del procedimiento legislativo, siendo estos la aprobación por

parte de la mencionada Comisión de Límites Territoriales y luego, por la propia legislatura del Estado de México, del Dictamen por el que se da por concluido el conflicto limítrofe entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, de esa entidad, de tal suerte que, la impugnación no la hace derivar de la publicación de un Decreto en el medio de difusión oficial, sino de actos emanados en el inter del referido procedimiento.

Al respecto, cabe destacar un criterio de este Alto Tribunal, que resulta aplicable de manera análoga al presente asunto, relativo a que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento; de tal forma que no es impugnabile cada acto legislativo en lo individual, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

En ese sentido, se ha sostenido que los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto que solo adquieren definitividad al momento de la publicación de la norma general que ha sido objeto de dicho procedimiento; así la impugnación de los actos que lo integran sólo puede realizarse a partir de que la norma general emanada de tal procedimiento es publicada, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

Lo anterior tiene sustento en la tesis de rubro y texto siguiente:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada, es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 104/2021

publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.”⁴

En congruencia con lo anterior, el acto que contiene la aprobación del Dictamen por el que se da por concluido el procedimiento para la solución del diferendo limítrofe intermunicipal entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México, que se aduce, fue aprobado por la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y por la legislatura del Estado, no es susceptible de impugnarse a través de controversia constitucional, ya que para poderlo hacer, es requisito indispensable que ese Dictamen haya sido publicado en el Periódico Oficial de la entidad.

En ese tenor, los artículos 1.2. del Código Civil del Estado de México y los diversos 3 y 5, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de México, establecen la obligación de que las leyes, reglamentos, acuerdos, o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, expedidos por el Congreso local, sean publicados en el Periódico Oficial de la entidad, tal como se advierte a continuación:

Código Civil del Estado de México:

“Artículo 1.2.- Las leyes y demás disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos a los cinco días siguientes de su publicación en el periódico oficial del Estado, a no ser que se fije el día en que deba comenzar a regir, pues entonces obliga desde esa fecha.”

Ley del Periódico Oficial del Estado de México:

“Artículo 3. El periódico oficial es un medio de difusión de carácter permanente e interés público dependiente de la Secretaría y órgano informativo del Gobierno del Estado de México cuyo objeto es publicar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, notificaciones, avisos, manuales y demás disposiciones de carácter general de los poderes del Estado, organismos autónomos, organismos auxiliares, ayuntamientos y de particulares.”

“Artículo 5. Son materia de publicación obligatoria en el periódico oficial:

I. Las leyes, decretos y acuerdos expedidos por la Legislatura del Estado, promulgados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.”

Asimismo, la actualización de la causa de improcedencia de falta definitividad se robustece, si se toma en consideración que el propio Municipio de Tepotzotlán manifiesta, en el escrito de desahogo de prevención, que desconoce de forma íntegra el contenido del referido dictamen que pretende

⁴Tesis jurisprudencial P./J. 130/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188642.

controvertir, al sostener que “[...] se expresa a sus Señoría que en el momento procesal oportuno y una vez conociendo el contenido del **DICTAMEN APROBADO POR LA RESPONSABLE** [...]”, lo que hace fehaciente que no se ha cumplido con la promulgación y publicación respectiva, que haga patente la difusión y conocimiento general del contenido del aludido Decreto impugnado.

Además, es de señalar que en ningún apartado del escrito inicial se advierte que se haya controvertido la competencia del Congreso del Estado de México, ni de sus órganos al interior, para conocer del procedimiento de validez o aprobación del Dictamen multicitado; ni tampoco se desprende algún cuestionamiento en relación con las atribuciones del Poder Ejecutivo, para formular posibles observaciones del decreto que en su caso se emita, o para que éste lleve a cabo la publicación respectiva; lo cual, hace evidente que no existe materia respecto de la cual este Alto Tribunal se deba de pronunciar.

Con lo anterior, el suscrito Ministro instructor no pasa inadvertido lo resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 64/2005, de donde se desprendió la tesis de rubro: “**CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR EL DECRETO DE CREACIÓN DE UN NUEVO MUNICIPIO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA PARTE ACTORA TIENE CONOCIMIENTO DE AQUÉL, AUNQUE TODAVÍA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR**”, citada en el escrito de desahogo de prevención. Sin embargo, la interpretación que hacen los promoventes de aquélla es inexacta, ya que en el asunto del que emanó, lejos de resolverse que es factible impugnar un decreto cuando se trata de un acto del Poder Legislativo local en una fase previa a su publicación, lo que en realidad se determinó fue tener como fecha para el cómputo de plazo, cuando el actor tuvo conocimiento del acto, lo cual aconteció con la publicación del Decreto en el Periódico Oficial de la entidad y no así con su entrada en vigor.

Por tanto, se robustece que para ser impugnabile el Dictamen a través del cual se resuelve el diferendo territorial entre los municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México, resulta indispensable la emisión del Decreto y la publicación del mismo.

Lo anterior también encuentra apoyo en la tesis de rubro y texto siguiente:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO. Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación.”⁵

Así las cosas, de la simple lectura de la demanda y anexos, se advierte que el municipio actor combate un acto que no es susceptible de impugnarse mediante controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, por lo que lo conducente es desechar la presente demanda que dio origen a este expediente.

Esta conclusión encuentra apoyo en la tesis que a continuación se señala:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano.”⁶

Por lo expuesto y fundado se,

A C U E R D A:

⁵Tesis jurisprudencial P./J. 67/2003, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página 433, registro 182866.

⁶Tesis P. LXXI/2004, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1122, registro 179954.

PRIMERO. Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda presentada por el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

SEGUNDO. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282⁷ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones del presente auto.

Finalmente, agréguese al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este acuerdo, en términos del Considerando Segundo⁸ y artículo 9⁹ del **Acuerdo General número 8/2020, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este Alto Tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.**

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Juan Luis González Alcántara Carrancá**, quien actúa con la Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

Esta hoja corresponde al proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el **Ministro instructor Juan Luis González Alcántara Carrancá**, en la **controversia constitucional 104/2021**, promovida por el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Conste.

LATF/EGPR 3

⁷ **Artículo 282.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

⁸ **SEGUNDO.** La emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de dos mil veinte, ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio esencial de impartición de justicia y control constitucional a cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro, acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia, como a otras que en el futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologías de la información y de herramientas jurídicas ya existentes, como es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y

⁹ **Artículo 9.** Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	JUAN LUIS GONZALEZ ALCANTARA CARRANCA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	GOCJ490819HDFN RN05			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000001a51	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	19/11/2021T19:15:37Z / 19/11/2021T13:15:37-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		19 a5 f4 41 c4 89 ba 37 37 d1 65 4e 9d 3a a9 ca 07 a7 87 a8 c0 ac 23 c7 d9 5e c8 4d d1 69 4b 4f 98 b1 a8 f5 57 0c 77 18 ec f1 3c ac 10 f2 e9 91 61 6a 2f d3 5d fb ce 67 0a 04 49 37 6d 28 38 d2 36 20 f6 6e 1c 86 07 4d 09 06 cb bb 38 27 01 15 29 2b a8 1d 39 88 99 a8 f3 86 df 5a bd 25 30 5d e3 5c b9 5d 41 5c 9f 15 a7 64 bd d6 15 71 e1 3e ff 79 45 53 8c 16 02 dc eb 7d 66 9b 86 8e 4d f7 76 98 e5 79 62 dc 12 8d 64 34 2f 76 88 e9 07 e8 3b 95 ac fc e1 40 82 fc af ce 84 75 d0 75 cc f1 05 a2 5f 39 e8 4d c2 d9 5e 28 c9 7f f8 c5 d4 08 16 23 28 f8 d8 02 d9 1f 4c c8 09 33 66 47 6f 17 ee b7 54 0e 83 85 61 3b b7 f2 c1 49 eb 65 aa 2f 78 5d 3c 32 72 5d ea 2d e1 4d e2 4f 03 a1 73 89 3e 4b 05 b5 af 56 fc 21 bf 05 65 18 40 8b 53 f0 23 68 cf ac 5b 0e d7 6e fd 3e 6c a8 6b 39 8a fc			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	19/11/2021T19:15:37Z / 19/11/2021T13:15:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000001a51			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	19/11/2021T19:15:37Z / 19/11/2021T13:15:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	4250731			
	Datos estampillados	E74BC4B0C039E588ACC61A2076763288CA18A3E227FE508A99F87674D98A3CD2			

Firmante	Nombre	CARMINA CORTES RODRIGUEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	CORC710405MDFRDR08			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000001b62	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/11/2021T20:13:09Z / 18/11/2021T14:13:09-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		42 f2 f6 09 9c ad 09 d3 e2 46 0c 9e 24 76 ea e3 18 01 1a 77 f1 f0 4e 2a 09 83 1e 41 b8 a1 73 2e 4b 5f 0d d6 4c 11 21 e5 d7 90 53 60 d5 aa b7 99 ca 39 ab d1 70 c2 27 ca a7 0b 2d 4a 6f 4a f8 6c 98 3f ef 24 e3 fd dc 04 e5 ee ad dd 60 f9 14 0e 74 65 d3 78 52 44 65 56 8a 51 04 38 0e 1c 6a ab cb 09 be 25 d6 8f 8c 91 8b b4 81 f6 0d 0b 83 2f 4c f5 a9 fd d6 7d 2e 74 20 32 69 5e 6b 1c e7 72 2a b4 c3 2b a7 6a 6b 53 b2 8c 24 cc 4e 49 9f 22 c1 82 72 e3 eb c3 63 87 ee fa 03 78 4a 8a 28 8b dc 52 21 bb 1d f6 03 7b 94 73 4d 17 2b a7 10 ed 9d af 76 fa e8 81 d5 9e 31 8a ef e1 24 d8 f8 a0 d2 bb 39 c3 26 e2 56 2b 52 5d cd f9 65 6f 10 1d 1b 9c 08 fe 3b e0 31 a0 09 42 fb 03 82 70 bc d4 6d e1 b9 01 7e 81 e0 56 ac 5d 0b 9c 0a ca fa d5 2f fe b8 a7 e4 6d 2c 71 10 70 71 e8 55 e3 8e 05			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/11/2021T20:13:09Z / 18/11/2021T14:13:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000001b62			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/11/2021T20:13:09Z / 18/11/2021T14:13:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	4247140			
	Datos estampillados	02A7E9FB393E81DCD05C1753CE88452A6EF947004ADD61236606A3CB849B6AC9			